# INFORME SOBRE SITUACIÓN ACTUAL DE DESPLAZAMIENTO FORZADO POR VIOLENCIA GENERALIZADA EN EL SALVADOR

Este informe ha sido presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Audiencia Temática celebrada el lunes 19 de octubre 2015 en WDC. Contiene un breve contexto sobre la violencia en El Salvador, panorama general sobre el fenómeno del desplazamiento interno forzado, sufrido por víctimas de la violencia y referencia a casos de desplazados internos por violencia y crimen organizado que han recibido asistencia por parte de organizaciones integrantes de la Mesa de Sociedad Civil contra desplazamiento forzado en El Salvador.

El Salvador es uno de los países de Centroamérica que sufre de violencia en todas sus manifestaciones. De acuerdo a autoridades de la Policía Nacional Civil del país, el mes de septiembre del año 2015 cerró con un promedio superior a las 12 muertes diarias.

Ante la situación anterior, muchas organizaciones sociales y no gubernamentales atendemos a las personas afectadas por la violencia, de manera específica, aquellas personas que sufren de desplazamiento forzado, donde en contra de su voluntad y salvaguardando su vida, salen de su casa hacia otro lugar, que muchas veces no presta las condiciones adecuadas y la familia tiene que fragmentarse.

En este marco de trabajo de las organizaciones sociales y no gubernamentales con el fin de buscar fortalecer la atención a personas que sufren desplazamiento forzado, ha creado la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado “La Mesa” (conformada por: Red para las Migraciones – El Salvador REDMIGRES, Servicio Social Pasionista SSPAS, Grupo de Monitoreo Independiente de El Salvador GMIES, Instituto de Derechos Humanos de Universidad Centroamericana IDHUCA, Universidad Tecnologica de El Salvador UTEC, Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, Fundación CRISTOSAL, Cruz Roja Salvadoreña CRS, Iglesia Anglicana de El Salvador, Iglesia Luterana de El Salvador, Misioneros de San Carlos Scalabriniano SIMN y American Friends Service Committee AFSC), la cual además de brindar atención a casos puntuales, genera incidencia y cabildeo ante gobiernos e instancias internacionales con el fin de visibilizar el tema, y generar cada día, una mejor ruta de atención para disminuir el sufrimiento de las personas que son afectadas por esta problemática colateral de la violencia social.

**Contexto salvadoreño sobre la situación de violencia**

Después de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, El Salvador ha vivido una etapa de cambios sociales, económicos y culturales que continúan transformando a la sociedad salvadoreña. Sin embargo, los problemas estructurales que originaron el conflicto armado no han sido resueltos, la pobreza, la desigualdad, la falta de oportunidades, como la corrupción que ha operado en la institucionalidad estatal y otros han continuado erosionando el tejido social y creado nuevas dinámicas sociales. Una de las tantas consecuencias de esa fractura social es el fenómeno de las maras y otros grupos, que realizan actividades delictivas y criminales como extorsiones, asesinatos, violaciones, tráfico de drogas, robos entre otros.

Ante este fenómeno las estrategias estatales para hacer frente a la violencia ejercida por dichas agrupaciones, se han desarrollado de diferentes maneras en el transcurso de los años. En 2003 se implementó el Plan Mano Dura, en 2004 el Plan Súper Mano Dura. En el 2012 se inició un proceso denominado “Iniciativa para la vida y la paz”, pero más conocido como “tregua” entre la “Mara Salvatrucha” y la pandilla “Barrio 18” que fue facilitado por Fabio Colindres, el obispo castrense de la iglesia catolica y Raul Mijango, líder histórico de izquierda. Este proceso permitió la reducción de 13 homicidios diarios a 5 por día.

Aunque oficialmente no se reconoció de parte del Estado el apoyo público a la “tregua”, muchas acciones realizadas por su parte denotaron que se encaminaban a apoyarlo. Para el 2014 el gobierno en turno decidió no continuar con el apoyo no oficial a la tregua. En el 2015, a través del el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, iniciativa convocada por el gobierno que abarca a una gama amplia de sectores de la sociedad salvadoreña, presentó el Plan “El Salvador Seguro” que busca ser la respuesta a la situación de violencia en el país. Sin embargo, dicho plan carece de financiamiento y un plan de seguimiento para su implementación de un abordaje integral en algunos temas como la atención a víctimas.

En el 2015, el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, iniciativa convocada por el gobierno que abarca a una gama amplia de sectores de la sociedad salvadoreña, presentó el Plan “El Salvador Seguro” que busca ser la respuesta a la situación de violencia en el país. Sin embargo, dicho plan carece de financiamiento y un plan de seguimiento para su implementación de un abordaje integral en algunos temas como la atención a víctimas.

En el transcurso del 2015 la violencia ha ido aumentando hasta catalogar agosto como el mes más violento con 911 homicidios, según datos revelados por el Instituto de Medicina Legal (IML) y la Policía Nacional Civil (PNC). En los datos registrados desde el 1 de enero hasta el 31 de agosto, se han reportado 4,246 homicidios[[1]](#footnote-1).

Sin embargo, las medidas adoptadas por el actual gobierno no están dando los resultados esperados ya que al parecer, las medidas de seguridad lejos de trabajar en prevención de violencia, trabajan en un eje frontal y confrontativo en las comunidades de los municipios más violentos de San Salvador, que es el departamento con mayores tasas de homicidios y violencia[[2]](#footnote-2).

Factores como la desigualdad social, la falta al acceso a la educación y la economía estancada de El Salvador, son factores que han influido en que la juventud de las comunidades más pobres del país se integren a grupos del crimen organizado, la cual incluye a las maras y pandillas que actúan como grupos criminales que reclutan a jóvenes, niños y adolescentes, en algunas ocasiones de forma forzosa, como elementos necesarios en sus estructuras para cometer delitos como extorsión y sicariato, entre otros.

El fenómeno de violencia social, está obligando a individuos y a muchas familias a desplazarse forzosamente de sus lugares de origen ya que temen ser asesinadas por las pandillas que dominan territorios contrarios a donde ellos viven o desarrollan sus actividades cotidianas, que las pandillas de sus colonias les pidan colaborarles en delitos, que les exijan a sus hijas como objetos sexuales o que quieran reclutar a sus hijos adolescentes y por último las amenazas directas a sus vidas por cualquier estructura criminal, ya sean pandillas, narcotráfico o grupos de exterminio.

Ante esta situación de violencia, miles de familias se ven obligadas a abandonar sus hogares y desplazarse con el fin de huir del fenómeno de la violencia. el desplazamiento forzado interno a causa de la violencia que vive El Salvador, es un fenómeno que no puede seguir siendo ignorado por el Estado salvadoreño.

**Panorama general sobre el fenómeno del desplazamiento interno forzado, sufrido por víctimas de la violencia**

El fenómeno de desplazamiento interno es un efecto de una situación de violencia generalizada en El Salvador. Son cientos de familias salvadoreñas que huyen de sus hogares para proteger su vida e integridad, muchas de las cuales terminan buscando protección internacional fuera de las fronteras del país debido a falta de atención o insuficientes medidas de atención por parte de instancias estatales salvadoreñas .

El Estado salvadoreño no reconoce oficialmente que existe un problema de desplazamiento interno forzado por violencia generalizada. No se cuenta con programas ni instituciones que brinden atención de protección eficaz ni efectiva ante las necesidades de estas víctimas. El fenómeno es invisibilizado o minimizado y no es tomado en consideración en el diseño de políticas públicas ni el marco jurídico. No existe un registro oficial de cuantos desplazados internos forzados por violencia existen en el país, debido, principalmente, a que al negar la existencia del fenómeno, los casos concretos de personas que recurren por ayuda ante instancias públicas no son registrados.

En el informe anual 2015 del Consejo Noruego para refugiados sobre personas desplazadas internas por conflictos y violencia, El Salvador aparece por primera vez señalado como uno de los países en el mundo con desplazados internos, estimando que en el 2014 un aproximado 288,900 personas se encontraban en situación de desplazamiento forzado en el país[[3]](#footnote-3).

El Salvador tiene un poco más de 20,000 kilómetros cuadrados, un territorio demasiado pequeño para poder ocultarse de estructuras de crimen organizado y pandillas que tienen amplio control territorial en casi toda la nación. Las personas y familias que son amenazadas por estas estructuras se ven obligadas a ocultarse y cambiar ubicación constantemente. Los derechos civiles y políticos son afectados gravemente, así como también sus derechos económicos, sociales y culturales, dado que al huir y esconderse las personas dejan sus trabajos, los niños, niñas, adolescentes y jóvenes abandonan sus estudios y las personas mayores suspenden sus seguimientos médicos.

Además en muchos de los casos que son atendidos por las organizaciones que integran la Mesa de sociedad civil contra desplazamiento forzado, las familias abandonan viviendas propias adquiridas con mucho esfuerzo o que se encuentran hipotecadas a favor de instituciones financieras y que aun cuando se abandonan, deben seguir pagando, sin posibilidad de venderla, ya que por temor, ninguna persona vecina se atreve a comprar una vivienda abandonada[[4]](#endnote-1).

El huir de sus comunidades representa el abandono de un proyecto de vida el cual es muy difícil restablecer estando dentro del país, ya que además de abandonar sus pertenencias, propiedades y medios de vida, existen dificultades para que estas personas y sus familias puedan reinsertarse al mercado laboral, tener acceso a servicios de salud y educación e inclusive tengan dificultades para obtener documentos personales como partidas de nacimiento, documentos de identidad, pasaportes, registros educativos y de salud.

No se han encontrado registros que puedan determinar la afectación al derecho a una atención a la salud de personas que huyen de sus hogares por violencia generalizada. Sin embargo, sobre afectación al derecho a educación, en el 2014 la delincuencia fue la razón declarada por 13 mil 402 estudiantes de primer grado a bachillerato para abandonar la escuela. En el Ministerio de Educación creen que más allá de esa cifra, que equivale a uno de cada 100 alumnos matriculados el año pasado, causas como "cambio de domicilio" y "cambio de escuela" -que suman otros 20 mil estudiantes-, esconden la dimensión real del fenómeno.

El viceministro de Educación, Francisco Castaneda, afirmó que en septiembre de este año estar convencido de que el fenómeno de las pandillas es un factor fundamental en la deserción. "Se da el problema de que un joven vive en un lugar donde hay presencia de una pandilla y si va a otro centro escolar donde hay presencia de una pandilla enemiga, lo comienzan a estigmatizar con que también es pandillero. Deja ese centro escolar y se mueve a otro", comentó el funcionario en entrevista realizada con el periódico digital “El Faro”, en alusión a una de las 18 causas de deserción que registra el Ministerio año con año[[5]](#footnote-4).

Ante la falta del apoyo que piden a diferentes instituciones del Estado, las personas en situación de desplazamiento forzado, acuden a sus propias redes familiares y de amistades para buscar ayuda, pero al agotar estas redes al cabo de un tiempo, muchos toman la decisión de migrar fuera del país para buscar protección internacional. Esto convierte al desplazamiento interno como un primer paso para que estas víctimas se conviertan en migrantes forzados que buscan protección internacional en el extranjero.

|  |
| --- |
| **Refugiados y solicitantes de refugio salvadoreños por año** |
|  |
| **(2009-2014)** |
| Año | Refugiados | Refugiados retornados | Solicitantes de asilo (casos pendientes) | total: |
| 2009 | 5051 | 0 | 9751 | 14802 |
| 2010 | 4,976 | 2 | 1,543 | 6521 |
| 2011 | 6720 | 0 | 1636 | 8356 |
| 2012 | 8170 | 0 | 1635 | 9805 |
| 2013 | 9638 | 0 | 11281 | 20919 |
| 2014 | 10965 | 4 | 18037 | 29006 |
| Total: | 45520 | 6 | 43883 | 89409 |
| Fuente: Elaboración propia basada en datos de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR)[[6]](#footnote-5)  |

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), durante los años 2009 al 2014 se les otorgó el estatuto de refugiado a 45,526 salvadoreños. El incremento de solicitantes es palpable cuando se observa que de esa cantidad 5,051 refugiados obtuvieron su estatus el año 2009, habiendo para ese mismo año 9,751 solicitantes de refugio con casos pendientes. Ya para el año 2014 se otorgó estatus de refugiado a 10,969 salvadoreños y habían 18,037 solicitantes de refugio con casos pendientes, entre ambos años existe un incremento de un 117% del número de refugiados y un 85% de salvadoreños solicitantes de refugio con casos pendientes.

Este número registrado por ACNUR puede ser mucho mayor. Esto, debido a que no todos los salvadoreños que salen del país por ser víctimas de violencia activan los sistemas de protección internacional en los países donde se dirigen por desconocer que tienen ese derecho o son desmotivados por parte de las autoridades migratorias a ejercerlo o a abandonar procesos ya iniciados como sucede en los Estados Unidos de América y los Estados Unidos Mexicanos.

Las peticiones de asilo se dan más a países como Estados Unidos, Canadá y México, aunque también los países de Nicaragua, Costa Rica y Panamá registran un crecimiento de solicitudes de protección internacional.

Estas personas, muchas veces son sujetos a procesos de deportación, convirtiéndolos en deportados con necesidades especiales de protección. Si bien la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME), instancia encargada de recibir a los salvadoreños deportados no lleva un registro de aquellos con necesidades especiales de protección, el “Diagnóstico sobre la caracterización de la Población Salvadoreña retornada con Necesidades de Protección” del ACNUR elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA) y que se realizó en el centro de recepción de deportados provenientes de México, refleja que en el primer trimestre de 2014 confirman el patrón y evidencian un incremento del 5.2% a un 10.8% anual de personas que han salido por la inseguridad y la violencia.

Estas personas al no tener más opción que retornar al lugar donde experimentó la violencia, se ven obligados a migrar nuevamente; el 42.6% de los deportados vía terrestre de México manifestaron que planeaban emprender el recorrido. Estas personas se ven inmersos en un ciclo de desprotección que inicia cuando son victimizados y se convierten en desplazados internos, luego en migrantes forzados con necesidades de protección internacional y finalmente pasan a ser deportados con necesidades especiales, tornándose nuevamente en desplazados internos, repitiendo muchos ese ciclo en varias ocasiones susceptibles a la re migración.

Ante el incremento de dificultades de la ruta migratoria hacia EE.UU. algunas de estas personas han buscado nuevas alternativas, especialmente en otros países centroamericanos. Aunque los salvadoreños a quienes se les otorgó el estatuto de refugiado y solicitantes de refugio con casos pendientes en el año 2014 fue de 27,155 en Norteamérica, en Centroamérica se registran 1241 casos repuntando Costa Rica con 478, Panamá con 335 y Nicaragua con 223; y en países europeos por lo menos 536[[7]](#footnote-6), la mayoría en Italia con 184 y Suecia con 155.

En muchos de los casos un hecho de violencia dirigido a una persona implica que todo su grupo familiar se vea afectado y quiebra el tejido social de las comunidades; ya que las personas se ven obligados a huir con sus familias o a abandonarlas. Han existido casos en que grupos de vecinos y comunidades enteras son expulsados de sus hogares ante amenazas de grupos delincuenciales. Es de notar que debido a que las restricciones migratorias en los países del sur de Centroamérica son más flexibles, muchos no activan los procesos de protección internacional, teniendo solo indicios de los flujos de estas nuevas rutas.

En muchos de los casos un hecho de violencia dirigido a una persona implica que todo su grupo familiar se vea afectado y quiebra el tejido social de las comunidades; ya que las personas se ven obligados a huir con sus familias o a abandonarlas. Han existido casos en que grupos de vecinos y comunidades enteras son expulsados de sus hogares ante amenazas de grupos delincuenciales.

A través de medios de comunicación local, testimonios comunitarios y organizaciones sociales se tiene constancia del éxodo de familias enteras en diferentes municipios del país. Dichos eventos han sido documentados por los medios de comunicación salvadoreños de mayor circulación digitales e impresos. Recientemente reportes de éxodos de más de 50 familias en la localidad de Izalco, departamento de Sonsonate y más de 10 familias en el municipio de Mejicanos y Ayutuxtepeque, departamento de San Salvador, en la zona del Bajo Lempa en el oriente del país, así como reportes de historias de desplazados en localidades de Puerto el Triunfo, Cuscatancingo, San Martin, entre otros municipios, son ejemplo de una realidad planteada como inexistente por parte de las autoridades estatales **(véase anexo 1).**

Las organizaciones de la Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Forzado por Violencia y Crimen Organizado de El Salvador, brindan apoyo a estas víctimas prestándoles acompañamiento que abarca asesoría legal, albergue y ayuda psicológica, entre otros. Este conjunto de 12 organizaciones conocen entre 3 a 5 casos semanales vía solicitudes personales, llamadas telefónicas o mediante diferentes comunicaciones electrónicas, lo que implica un aproximado de 500 casos. No obstante, no todos los casos de los que se ha tenido conocimiento reciben asistencia y acompañamiento especializado, orientándosele a las personas que comunican sobre sus casos utilizando estos medios a que recurran a instancias estatales, principalmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH).

Entre agosto 2014 a septiembre 2015, seis de las doce instituciones que integran la Mesa de sociedad civil dieron asistencia y acompañamiento especializado a 109 casos de desplazamiento interno que ha afectado a 510 personas. Adicionalmente se plantean también en este informe el registro de 25 casos que investiga la a Fundación Ideas y Acciones para la Paz, Quetzalcoatl en el Área Metropolitana de San Salvador. Los casos más graves documentados por esta Fundación suceden en la colonia “La Gloria”, municipio de Mejicanos en San Salvador. El reporte con fragmentos testimoniales se anexa a este informe (Anexo 2).

En su mayoría, esta población ha huido de sus comunidades por negarse a vender sus tierras a estructuras criminales como narcotraficantes; para evitar que se cumplan amenazas de muerte o sufrir represalias por ser testigos de un hecho delictivo; impedir que los hijos sean reclutados por las pandillas o que sus hijas sean violadas y se conviertan en servidoras sexuales de líderes de pandillas, librarse de las extorsiones de los pandilleros, ser utilizados para ingresar bienes no permitidos al sistema penitenciario, que ex miembros de pandillas reformados sean nuevamente obligados a incorporarse a la estructura criminal, entre otros. (Ver cuadro 1)

De la muestra se determina que aunque existen casos registrados donde solo es desplazado un individuo, en la mayoría de casos los desplazados son grupos familiares, ya sea se trasladen junto al afectado directo o lo hagan posteriormente. De esta población el 47% son del sexo masculino y el 53% del sexo femenino, tendencia que se mantiene cuando se comparan mujeres adultas con un 54% y hombres adultos con un 46%, en los adolescentes siendo de sexo masculino el 48% y femenino el 52%, pero varia un poco en niños donde los de sexo masculino son un 51% y las niñas un 49%. En general, el 66% son adultos y el 33% niños y adolescentes, siendo el 36% mujeres adultas, 31% hombres adultos, 11% niños, 10% niñas, 6% adolescentes del sexo femenino y 6% del sexo masculino.

|  |
| --- |
| **Víctimas de desplazamiento interno por edad y sexo** |
| **(agosto 2014 - septiembre 2015)** |
|  |  |  |  |
|   | **M** | **F** | **TOTAL:** |
| **Adultos** | 157 | 185 | 342 |
| **Niño\*** | 55 | 52 | 107 |
| **Adolescente\*\*** | 29 | 32 | 61 |
| **TOTAL:** | 241 | 269 | 510 |
| \*Niño: menores de 12 años |  |
| \*\*Adolescentes: entre 12 a 18 años |  |
| Fuente: Elaboración propia con información de casos registrados por Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia y Crimen Organizado |

|  |
| --- |
| **Autores de violencia que causan desplazamiento** |
| **(agosto 2014- septiembre 2015)** |
| **causante de desplazamiento**  | **casos** | **víctimas** |
| Pandilla | 101 | 484 |
| Particular | 3 | 9 |
| narcotraficantes  | 2 | 7 |
| policía  | 2 | 4 |
| crimen organizado  | 1 | 6 |
| **TOTAL:** | **109** | **510** |
|  Fuente: Elaboración propia con información de casos registrados por Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia y Crimen Organizado |

Es importante señalar que a pesar que un 92% de los casos en el que el 95% de las víctimas afectadas se han desplazado son ocasionados por pandillas, también existe un 8% de casos que afecta a un 5% de las víctimas que es ocasionado por otros actores como particulares que en ocasiones se han hecho pasar por pandilleros o se sospecha que tienen nexos con las pandillas, narcotraficantes, la PNC y crimen organizado no vinculado a pandillas. Estos otros agentes de violencia son señalados de hacer amenazas, acosar a las víctimas, entre otros; uno de los casos donde un homicidio causó el temor para que la familia se desplazara se señala a la policía como agente agresor.

En general, los hechos de violencia registrados están relacionados en el 32% de los casos al homicidio de un familiar, el 30% a amenazas, el 14% a varias causas conexas en donde la mayoría de los casos existe una amenaza con el objetivo de intimidar a la población, un 9% a intentos de homicidio sufridos directamente por las víctimas o dirigido a un miembro del grupo familiar y el resto 15% relacionados a otros hechos violentos . [[8]](#footnote-7).

|  |
| --- |
| **Desplazados por departamento de origen** |
| **(agosto 2014 a septiembre 2015)** |
|  |  |  |
| **Departamentos** | **Casos** | **Desplazados** |
| San Salvador | 57 | 260 |
| Cuscatlán | 8 | 45 |
| La Libertad | 12 | 37 |
| Santa Ana | 5 | 32 |
| Usulután  | 4 | 25 |
| Sonsonate | 5 | 24 |
| La Paz  | 3 | 19 |
| San Miguel | 6 | 17 |
| San Vicente | 3 | 17 |
| Ahuachapán | 3 | 17 |
| Chalatenango | 2 | 11 |
| Morazán | 1 | 6 |
| TOTAL: | 109 | 510 |
| Fuente: Elaboración propia con información de casos registrados por Mesa de Sociedad Civil sobre Desplazamiento Interno por Violencia y Crimen Organizado |

Los casos registrados por la mesa también reflejan que los únicos departamentos que no registran desplazados internos son Cabañas y la Unión. Esta población proviene en su mayoría de la zona paracentral con un 76% , especialmente del departamento de San Salvador de donde a huido el 51% de los desplazados internos. Los departamentos de Cuscatlán y La Libertad son quienes le siguen en cuanto a número de desplazados con un 9% y 7% respectivamente. La zona occidental registra un 14% de personas desplazadas y la zona oriental un 10%.



La situación descrita amerita se ponga del conocimiento de instancias supranacionales que velan por la vigencia y el respeto a los derechos Humanos. Se espera puedan tomarse las medidas necesarias y urgentes que permitan que el Estado Salvadoreño pueda atender el fenómeno y no permitir que se acumulen condiciones más graves de consecuencias irreversibles.

**Peticiones a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos**

1. Solicitarle a la Ilustre Comisión, tenga a bien expresar al Estado salvadoreño su preocupación por la situación de Desplazamiento Forzado Interno en El Salvador, con enfoque a las víctimas, e incluirlo en su comunicado oficial correspondiente al presente período de sesiones, así como incluir una referencia a esta problemática en su informe 2015.
2. Inste al Estado salvadoreño a reconocer la situación de Desplazamiento Forzado Interno y a generar las medidas legislativas o de otra índole para la adecuada protección de las víctimas de desplazamiento forzado, como: a) impulsar las reformas legislativas e institucionales pertinentes para adecuar su ordenamiento jurídico a las obligaciones internacionales en materia de desplazamiento interno; b) Dar seguimiento a las acciones (106 y 111) del Eje 4 del Plan El Salvador Seguro que se refiere a la atención y protección a víctimas, que hacen mención al desplazamiento; c) Elaboración de un diagnóstico situacional sobre desplazamiento interno forzado y generación de políticas públicas especificas en el tema; d) el desarrollo de protocolos institucionales para la atención y protección de personas afectadas por el desplazamiento interno; y e) Instar a los Países del Triángulo Norte que dentro del Plan Alianza para la Prosperidad incluyan financiamiento para la atención a desplazados internos.
3. Solicitar a esta honorable Comisión que en el marco de sus funciones en la promoción y vigilancia de los derechos humanos en la región, inste a los países receptores de personas desplazadas para que cumplan con el Plan Cartagena+30.
4. Solicitar una visita in situ de la Relatora de la CIDH asignada al país, para verificar la situación de las personas desplazadas internamente y el cumplimiento de las obligaciones del Estado salvadoreño en la materia.

**Anexos**

<http://www.lapagina.com.sv/nacionales/109871/2015/09/01/Familias-huyen-de-pandillas-en-canton-Talcomunca-de-Izalco>

<http://www.laprensagrafica.com/2015/01/20/familias-desalojan-condominio-en-mejicanos-por-amenazas-de-pandillas>

<http://www.elsalvador.com/articulo/sucesos/desalojan-familia-ilopango-por-amenazas-65128>

<http://www.laprensagrafica.com/2015/04/19/obligan-a-familia-a-abandonar-vivienda-en-reparto-las-caas>

<http://www.lapagina.com.sv/ampliar.php?id=97634>

<http://elmundo.com.sv/familia-pide-asilo-tras-huir-por-amenazas/>

<http://www.especiales.elfaro.net/es/salanegra_desplazados/>

<http://www.elfaro.net/es/201508/noticias/17252/La-deserci%C3%B3n-escolar-por-inseguridad-se-duplic%C3%B3-en-los-%C3%BAltimos-cinco-a%C3%B1os.htm>

1. Para mayor información, consultar el siguiente enlace: <http://public.tableau.com/profile/el.faro#!/vizhome/Homicidios2004-2015hastaagosto/Homicidios2004-2015> [↑](#footnote-ref-1)
2. Referencia de análisis de datos: <http://observatoriodeviolencia.ormusa.org/violenciasocial.php> [↑](#footnote-ref-2)
3. Datos obtenidos del siguiente enlace: <http://www.efe.com/efe/america/sociedad/cifran-en-289-000-a-las-victimas-de-desplazamiento-forzado-el-salvador/20000013-2605247>. [↑](#footnote-ref-3)
4. [↑](#endnote-ref-1)
5. Información obtenida del siguiente enlace: http://www.elfaro.net/es/201508/noticias/17252/La-deserci%C3%B3n-escolar-por-inseguridad-se-duplic%C3%B3-en-los-%C3%BAltimos-cinco-a%C3%B1os.htm [↑](#footnote-ref-4)
6. Datos de ACNUR obtenidos del siguiente enlace official: http://popstats.unhcr.org/en/overview [↑](#footnote-ref-5)
7. Debido a que en el caso de Holanda por cuestiones de protección de identidad de los solicitantes y los refugiados ACNUR solo revela que el número registrado oscila entre 1 a 4 se ha tomado el valor mínimo de 1 para contabilizar los datos de este país. [↑](#footnote-ref-6)
8. Otros hechos violentos: incluye a testigo protegidos con temor a su seguridad, temor por violencia generalizada, víctima de trata de personas directo y/o miembro de familia, violación a NNA directo y/o miembro de familia, extorsión, desaparición forzada de familiar, acoso, privación de libertad directo y/o miembro de familia y lesiones. [↑](#footnote-ref-7)